



RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN

SALA SEXTA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, febrero (23) de dos mil veinticuatro (2024)

REFERENCIA:	SENTENCIA
PROCESO:	ORDINARIO LABORAL – PRIMERA INSTANCIA
DEMANDANTE:	JOSE HERIBERTO BEDOYA GARZÓN
DEMANDADOS:	ELVIA BUSTAMANTE DE CORREA Y OTROS
RADICADO:	050013105 – 021201200481 01

ACTA N°: 10

La Sala Sexta de Decisión Laboral, conformada por los Magistrados **ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ, JUAN DAVID GUERRA TRESPALACIOS** y **MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA** procede a pronunciarse en virtud del **GRADO JURISDICCIONAL DE CONSULTA** en el proceso de trámite ordinario laboral de primera instancia promovido **JOSÉ HERIBERTO BEDOYA GARZÓN** en contra de **ELVIA BUSTAMANTE VIUDA DE CORREA, CASTOR ALBERTO, MARGARITA, MIGUEL ÁNGEL, JOSÉ ROBERTO** y **LUIS FERNANDO CORREA BUSTAMANTE, HEREDEROS DETERMINADOS E INDETERMINADOS DEL CAUSANTE CASTOR IVÁN CORREA, y ELIUD BEDOYA MARÍN**, toda vez que la sentencia proferida por el Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito de Medellín resultó totalmente contraria a las pretensiones del demandante.

A continuación, la Sala, previa deliberación sobre el asunto, como consta en el **acta 10** de discusión de proyectos, adoptó el presentado por la ponente, el cual quedó consignado en los siguientes términos:

1. LA DEMANDA¹

JOSÉ HERIBERTO BEDOYA GARZÓN pretende con este proceso el reconocimiento de pensión de jubilación de manera solidaria, conjunta o separada por parte de los demandados, a partir del 5 de junio de 2005 y teniendo en cuenta el Régimen de Transición, a ser afiliado al Sistema General de salud, intereses moratorios, indexación y costas.

¹ CARPETA PRIMERA INSTANCIA – ARCHIVO 01

Para sustentar sus pretensiones afirmó: **i)** Mediante proceso ordinario laboral anterior y tramitado en el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Medellín, demandó a los señores ELVIA BUSTAMANTE VDA. DE CORREA, CASTOR ALBERTO, MARGARITA, MIGUEL ÁNGEL, JOSÉ ROBERTO y LUIS FERNANDO CORREA BUSTAMANTE, HEREDEROS DETERMINADOS E INDETERMINADOS DEL CAUSANTE CASTOR IVÁN CORREA con el fin de que se declarara una relación laboral como mayordomo iniciada con el señor CASTOR IVÁN CORREA y continuada con sus sucesores por un espacio de más de 25 años y consecuentemente como superó la edad de 60 años, se condenara al reconocimiento y pago de las mismas pretensiones que son objeto de este nuevo proceso, además de sendos créditos laborales. **ii)** En sentencia proferida por el Juzgado Segundo adjunto del Juzgado Tercero Laboral del Circuito se absolvió de las pretensiones, y si bien la decisión fue confirmada por el Tribunal Superior de Medellín, en la sentencia de segunda instancia se presentaron varias salvedades que permiten obligatoriamente se demande de nuevo a los herederos determinados del causante CASTOR IVÁN CORREA y al señor ELIUD BEDOYA MARIN. Transcribe en el hecho tercero apartes de la providencia en los que se concluye la existencia de una sustitución patronal y la existencia de relación laboral con las partes de aquel proceso. **iii)** Así, afirma que conforme la sustitución de empleadores aceptada en aquel proceso y teniendo en cuenta la vinculación con ELIUD BEDOYA MARIN del **30 de septiembre de 1999 al 1 de febrero de 2003**, sumado a los **18 años 8 meses y 28 días** inicialmente laborados con el señor CASTOR IVÁN CORREA y sus hijos; cumple de sobra el requisito de 20 años laborados al servicio de los empleadores demandados, para tener derecho a la pensión de jubilación.

2. LA CONTESTACIÓN

2.1. ELIUD BEDOYA MARIN²

El señor **BEDOYA MARIN** se opuso a la totalidad de las pretensiones, señalando básicamente lo siguiente: Admite la calidad de empleador del señor JOSÉ HERIBERTO BEDOYA GARZÓN desde **septiembre de 1999 hasta febrero de 2003**. Si bien no desconoce la existencia del proceso laboral anterior y las decisiones adoptadas por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito y el Tribunal Superior de Medellín, señala que no se puede hablar de una sustitución patronal, porque el señor BEDOYA MARIN inició la relación laboral toda vez que dicho predio fue abandonado debido a un operativo de la fiscalía y cuando él entró en posesión de la finca no había trabajadores de ninguna índole. Propuso como excepciones de mérito las que denominó: INEXISTENCIA DE LA CAUSA, FALTA DE NEXO, MALA FE, COSA JUZGADA, PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN, e INEXISTENCIA DE LITISCONSORCIO.

² CARPETA PRIMERA INSTANCIA – ARCHIVO 06 – PÁGINAS 1- 4

2.2. LA CONTESTACIÓN DE MARIA ELVIA BUSTAMANTE DE CORREA, MARGARITA MARÍA CORREA BUSTAMANTE³ y CASTOR CORREA BUSTAMANTE⁴.

Los codemandados presentaron los escritos de contestación por separado, pero finalmente la tesis de defensa es la misma: Se oponen a la totalidad de las pretensiones, enfatizando que en la decisión adoptada por el Tribunal Superior en el proceso anterior tramitado bajo el radicado 2005-01239 no se demostraron las relaciones de carácter laboral por lo que tampoco debería tenerse en cuenta la reclamación que ahora depreca contra el señor BEDOYA MARIN. Manifiesta que la denominada Finca Cantabria durante los años 1999 hasta 2004 estuvo a disposición del Consejo Nacional de Estupefacientes y durante este periodo ninguno de los herederos del señor CASTOR IVÁN CORREA CASTAÑO tuvo injerencia en la administración de dicha propiedad, situación que no fue tenida por el Juzgador inicial ni por quien resolvió el recurso de alzada. Afirma que, según lo anterior, no hubo solución de continuidad para determinar alguna relación de carácter laboral.

MARGARITA MARÍA CORREA BUSTAMANTE y CASTOR CORREA BUSTAMANTE proponen como excepción de mérito FALTA DE PRUEBA DE LA CALIDAD DEL DEMANDADO. Y todos los demandados alegan TEMERIDAD Y MALA FE y CADUCIDAD DE LA ACCIÓN.

2.3. LA CONTESTACIÓN DE LUIS FERNANDO, MIGUEL ÁNGEL, JOSE HERIBERTO CORREA BUSTAMANTE ⁵ y HEREDEROS INDETERMINADOS⁶.

Estos demandados actúan por medio de **curador ad litem**, quien afirmó no se oponerse a las pretensiones y no le constan los hechos de la demanda, ateniéndose a lo que resulte probado.

3. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA⁷

Mediante sentencia del **21 de octubre de 2018**, el Juez Veintiuno Laboral del Circuito de Medellín decidió **ABSOLVER** a los demandados de las pretensiones declarando probada la excepción de inexistencia de la obligación. **CONDENÓ** en COSTAS a la parte demandante.

Para ello, razonó así: **i)** En primer lugar, se hace referencia a un incumplimiento de la carga probatoria, señalando que no se aportó copia del registro civil de nacimiento de los hijos del señor CASTOR IVÁN CORREA CASTAÑO ni registro civil del matrimonio de la

³ CARPETA PRIMERA INSTANCIA – ARCHIVO 06 - PÁGINAS 09 - 11

⁴ CARPETA PRIMERA INSTANCIA – ARCHIVO 12 - PÁGINAS 01- 03

⁵ CARPETA PRIMERA INSTANCIA – ARCHIVO 12 – PÁGINAS 41- 42

⁶ CARPETA PRIMERA INSTANCIA – ARCHIVO 12 – PÁGINA 45

⁷ CARPETA PRIMERA INSTANCIA – ARCHIVO 20

señora ELVIA BUSTAMANTE para acreditar la calidad de herederos. Que tampoco se aportó el Certificado de Libertad y Tradición para demostrar la calidad de propietario de la Finca Cantabria en cabeza del señor CORREA CASTAÑO y su cónyuge, señalando que se trata de aspectos que tampoco fueron demostrados en el primer proceso. **ii)** Expuso que, debido a su independencia para valorar las pruebas aportadas, no está obligado a acoger la postura que se acogió en la sentencia de segunda instancia por el Tribunal Superior de Medellín, referente a la existencia de una relación laboral durante 18 años entre el demandante y la familia CORREA BUSTAMANTE, argumentando que en relación con el proceso anterior no existe cosa juzgada dado que no se analizó el vínculo laboral que pudo existir con el señor BEDOYA MARÍN, lo que permite tener absoluta libertad para valorar las pruebas: Así, valoró las pruebas practicadas en el anterior proceso para concluir que no se acreditan los extremos temporales que se definieron en la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Superior de Medellín. **iii)** Concluyó que efectivamente existió contrato de trabajo entre el demandante JOSÉ HERIBERTO BEDOYA GARZÓN y el señor BEDOYA MARÍN entre **octubre de 1999** y el **año 2004** conforme lo confesado y en lo correspondiente a la SUSTITUCIÓN PATRONAL, invocó el artículo 67 del CST para señalar que, al demostrarse una única relación laboral no es posible aplicar esta figura, siendo necesario evidenciar los extremos temporales con el resto de los demandados.

4. TRÁMITE, COMPETENCIA Y DETERMINACIÓN DE LOS PROBLEMAS JURÍDICOS EN LA SEGUNDA INSTANCIA

Habiéndose corrido traslado para formular alegatos de conclusión en esta instancia⁸, únicamente el curador *ad litem* se pronunció⁹ solicitando se confirme la sentencia porque brilla por su ausencia cualquier prueba que logre acreditar la existencia del vínculo laboral. Resalta que solo se encuentra una prueba trasladada del Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Medellín que no aporta ningún elemento probatorio del contrato de trabajo. Si bien en el proceso tramitado en el Juzgado Tercero Laboral del Circuito podría deducirse el vínculo laboral, extremos y elementos del contrato de trabajo, esa prueba brilla por su ausencia en este expediente.

Con providencia del **18 de agosto de 2023** esta Sala dispuso reabrir el debate probatorio, incorporándose al plenario el expediente digital del proceso identificado con radicado 050013105 **003 2005 01239** 00 para que obrara como prueba trasladada en el presente

⁸ CARPETA SEGUNDA INSTANCIA – ARCHIVO 11 -

⁹ CARPETA SEGUNDA INSTANCIA – ARCHIVO 13 -

asunto, poniéndose en traslado de las partes el **7 de septiembre** siguiente, sin que se hubiese efectuado intervención alguna¹⁰.

Pues bien, el A quo profirió una **DECISIÓN ABSOLUTORIA** y la competencia de la Sala está dada en virtud del **GRADO JURISDICCIONAL DE CONSULTA** consagrado en el **artículo 69 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social**, en la medida de que la decisión resultó totalmente adversa a las pretensiones del trabajador. Así, los **problemas jurídicos** por resolver versan en determinar si concurren o no los requisitos para que se configure la figura de la sustitución patronal alegada y si es procedente condenar al pago de la pensión de jubilación.

6. EN EL PROCESO SE ACREDITA LA SUSTITUCIÓN PATRONAL

En la sentencia que se revisa, se presentaron varios planteamientos para proferir la decisión absolutoria:

6.1. SOBRE LA CALIDAD DE HEREDEROS DE LOS CODEMANDADOS Y LA TITULARIDAD SOBRE LA FINCA CANTABRIA

El A quo edifica la decisión absolutoria haciendo referencia a un incumplimiento de la carga probatoria de la activa, señalando que no se aportó copia del registro civil de nacimiento de los hijos del señor CASTOR IVÁN CORREA CASTAÑO ni registro civil del matrimonio de la señora ELVIA BUSTAMANTE para acreditar la calidad de herederos. Que tampoco se aportó el Certificado de Libertad y Tradición para demostrar la calidad de propietario de la Finca Cantabria en cabeza del señor CORREA CASTAÑO y su cónyuge, señalando que se trata de aspectos que tampoco fueron demostrados en el primer proceso

Analizando el expediente identificado con Radicado 050013105 003 2005 01239 en el que integraron la pasiva ELVIA BUSTAMANTE VIUDA DE CORREA, CASTOR ALBERTO, MARGARITA, MIGUEL ÁNGEL, JOSÉ ROBERTO y LUIS FERNANDO CORREA BUSTAMANTE - HEREDEROS DETERMINADOS DEL CAUSANTE CASTOR IVÁN CORREA - se observa que cada uno de los demandados dio respuesta a la demanda¹¹ y si bien se opusieron a las pretensiones, aceptaron ser hijos y cónyuge del finado CASTOR IVÁN CORREA.

¹⁰ CARPETA SEGUNDA INSTANCIA – archivos 14 a 19

¹¹ CARPETA SEGUNDA INSTANCIA - ARCHIVO 18 – PDFC012005-1239 – PAGINAS 67 a 73, 79 a 85, 131 a 137, 141 a 147, 187 a 193, 211 a 217

Tampoco negaron que la Finca Cantabria fuese del señor CASTOR IVÁN CORREA e incluso de la Escritura Pública con la que se protocolizó la sucesión se puede extraer que efectivamente tal inmueble era de su propiedad¹².

PARTIDA SEXTA. Un predio rural denominado **FINCA CANTABRIA**, ubicada en el Paraje Morritos, del Municipio de Heliconia, Antioquia, dividido en tres lotes, los cuales se distinguen así:_____

De esta manera, si bien MARGARITA MARÍA CORREA BUSTAMANTE y CASTOR CORREA BUSTAMANTE al contestar de la demanda en este proceso propusieron como excepción FALTA DE PRUEBA DE LA CALIDAD DEL DEMANDADO que fue acogida por el A quo, lo cierto es que se trata de un asunto sobre el que habían confesado en el proceso anterior instaurado por el señor **JOSÉ HERIBERTO BEDOYA GARZÓN** el ser hijos del señor CASTOR IVÁN CORREA. En efecto, CASTOR CORREA BUSTAMANTE al contestar el hecho primero de la demanda expresó:

AL PRIMERO: NO ES CIERTO. Mi representado no conoció que el demandante haya tenido la calidad que manifiesta, y menos aún tiene conocimiento de cuanto devengaba dicho señor, pues en ningún momento ha sido administrador o propietario de dicho bien. Tampoco sabe de la fecha desde la cual el señor **BEDOYA GARZÓN** estuvo al servicio de su señor padre. Según lo anterior deberá demostrarse lo afirmado en este hecho.

A su turno, MARGARITA MARÍA CORREA BUSTAMANTE al momento de absolver el interrogatorio de parte al contestar la pregunta 6 confesó que efectivamente era su padre quien en vida administraba la finca¹³:

sucesoral. CONTESTO: a mi mamá. PREGUNTA 6: diga si sabe que personas se han dedicado a la administración de ese predio rural tanto en vida de su padre como luego de él fallecer. CONTESTO: en vida de mi papá él, después de que él falleció mi hermano que se llama Miguel

Como se indicó, en aquel proceso hicieron parte los sujetos trabados en la presente litis, tuvieron todas las garantías procesales y por ello constituye plena prueba para efectos de resolver la controversia que ocupa la atención de la Sala.

6.2. EL EFECTO DE COSA JUZGADA EN RELACIÓN CON LO DEFINIDO EN LA PROVIDENCIA ADOPTADA EN EL ANTERIOR PROCESO

El Juez de instancia señaló que no estaba obligado a acoger la postura adoptada en la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Superior de Medellín en lo

¹² CARPETA SEGUNDA INSTANCIA - ARCHIVO 18 – PDFC012005-1239 – PAGINAS 87 a 101
¹³ CARPETA SEGUNDA INSTANCIA - ARCHIVO 18 – PDFC012005-1239 – PAGINAS 243 a 245

referente a la existencia de una relación laboral durante 18 años entre el señor **JOSE HERIBERTO BEDOYA GARZÓN** y miembros de la familia CORREA BUSTAMANTE que hicieron parte de aquella litis, negando la existencia de cosa juzgada, por el hecho de que en aquel proceso no fue convocado el señor **BEDOYA MARÍN**. Fue así como efectuó una nueva valoración sin contar con el expediente identificado con Radicado 050013105 003 2005 01239 que solo se incorpora al proceso en esta instancia, para concluir que no es posible establecer los extremos temporales del vínculo laboral.

Pues bien, debe señalarse que en la sentencia de segunda instancia proferida por la Sala de Descongestión Laboral¹⁴, si bien se confirmó la decisión absolutoria frente a las pretensiones de la demanda, en la parte motiva se razonó de este modo:

" se constató con la prueba testimonial la relación de trabajo sostenida entre el demandante y el señor CASTOR IVÁN CORREA, en su condición de propietario de la finca denominada "CANTABRIA", ubicada en el municipio de Heliconia (Ant.), hasta la data de su muerte, cuando continuó al servicio de sus hijos como herederos y la cónyuge supérstite, evidenciado así el cumplimiento del requerimiento de cambio de un empleador por otro, sin importar el origen, mediante el mismo contrato laboral, por cuanto la sustitución per se no lo modifica, suspende ni rescinde, y sin haberse dado variación esencial en el giro de sus actividades (Artículos 67 y 68 C.S. del T)

(...)

"En los términos señalados, y verificado el análisis y la libre apreciación de la prueba allegada al proceso, conforme a lo preceptuado en los artículos 60 y 61 del C. P. del T. y de la S. S., se tiene la certidumbre de haber tenido el hoy reclamante diversas contrataciones de índole laboral, es decir, de manera independiente y con solución de continuidad, la primera de ellas, se repite, consentida en gracia de discusión, del 31 de diciembre de 1980 al 29 de septiembre de 1999, iniciada con el fenecido señor CORREA, y prolongada con los accionados; la segunda, del 30 de septiembre de 1999 al 01 de febrero de 2003 con el señor BEDOYA MARÍN, y del 02 de febrero de 2003 al 05 de junio de 2005, bajo el nexo laboral con la señora BUSTAMANTE DE CORREA."

(...) Aclarada la prestación económica como la pensión de jubilación ante el empleador como persona natural, y no de vejez propia del sistema general de pensiones, basta con decir, que el tiempo de servicios de veinte (20) años, contenido como requisito sine qua non en el ya derogado artículo 260 del Estatuto Sustantivo Laboral, pero de aplicación en los eventos que aún lo ameriten, no se encuentra acreditado, en tanto **admitida la sustitución de empleadores, ya se dijo, únicamente entre el causante CASTOR IVÁN CORREA y los demandados**, esto es, del **31 de diciembre de 1980 al 29 de septiembre de 1999**, se tiene un periodo laborado de **dieciocho (18) años, ocho (8) meses y veintiocho (28) días**, aunado al de la edad, con extrañeza para la Sala, por la ausencia de prueba al respecto en un asunto dirigido a la petición en comento, que en otras circunstancias fácticas, podría suplirse en esta altura procesal, con apoyo en derechos de rango constitucional, pero sin ser este argumento el pertinente frente al también derecho fundamental al debido proceso probatorio, prescrito en el artículo 29 de la C. P." (Negrilla intencional de la Sala)

Pues bien, la cosa juzgada es una figura jurídica regulada por el art. 303 del CGP, cuyo tenor literal expresa:

¹⁴ CARPETA PRIMERA INSTANCIA – ARCHIVO 14 -

“La sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, se funde en la misma causa que el anterior y entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes”.

Se entiende que hay identidad jurídica de partes cuando las del segundo proceso son sucesores por causa de muerte de las que figuraron en el primero o causahabientes suyos por acto entre vivos celebrado con posterioridad al registro de la demanda si se trata de derechos sujetos a registro, y al secuestro en los demás casos (...). **(Negrilla propia)**

La finalidad de la cosa Juzgada consiste en imprimir fuerza vinculante a las sentencias, proteger su carácter definitivo e inmutable a fin de salvaguardar el orden social y la seguridad jurídica¹⁵. Al respecto, advierte la H. Corte Constitucional en sentencia C-522 de 2009 que la cosa juzgada es:

Una cualidad inherente a las sentencias ejecutoriadas, por la cual aquéllas resultan inmutables, inimpugnables y obligatorias, lo que hace que el asunto sobre el cual ellas deciden no pueda volver a debatirse en el futuro, ni dentro del mismo proceso, ni dentro de otro entre las mismas partes y que persiga igual objeto”. Citándose, mencionó que “el fin primordial de este principio radica en impedir que la decisión en firme sea objeto de nueva revisión o debate, o de instancias adicionales a las ya cumplidas, o que se reabra el caso judicial dilucidado mediante el fallo que reviste ese carácter, con total independencia de su sentido y alcances, dotando de estabilidad y certeza las relaciones jurídicas y dejando espacio libre para que nuevos asuntos pasen a ser ventilados en los estrados judiciales¹⁶”

La Sala de Casación Laboral de Corte Suprema de Justicia, interpreta que “*para determinar si existe identidad de objeto, el juez debe estudiar si con su pronunciamiento contradice una decisión anterior, ya sea porque se concedió el derecho reclamado o bien porque se negó. Puestas, así las cosas, y demostrada la igualdad entre las partes en ambos procesos, es del caso verificar si los planteamientos y las pretensiones incoadas en las correspondientes actuaciones, comprenden objetos ya resueltos y en ese caso, no pueden ser objeto de nuevo pronunciamiento*”¹⁷.

A partir de las anteriores premisas, esta corporación acoge los planteamientos efectuados por la activa en la demanda para sustentar su pretensión a partir de lo debatido en el anterior proceso y lo definido en la sentencia proferida en Segunda Instancia por el Tribunal Superior de Medellín, porque si bien se confirmó la decisión absolutoria al no encontrar acreditada una prestación personal del servicio de **20 años con quienes fueron demandados**, si definió: **i)** La existencia de una sustitución patronal entre el padre CASTOR IVÁN CORREA y sus hijos como herederos determinados en relación con la vinculación laboral del aquí demandante **JOSE HERIBERTO BEDOYA GARZÓN**, con ocasión de la prestación personal del servicio en la Finca Cantabria: **ii)** Los

¹⁵ SL 1079 de 2022.

¹⁶ C-543 de 1992.

¹⁷ SL 4084 de 2019.

extremos temporales de aquella relación laboral: Del **31 de diciembre de 1980 al 29 de septiembre de 1999**, señalando que corresponde a un período de **dieciocho (18) años, ocho (8) meses y veintiocho (28) días**.

Se trata entonces de aspectos que, en relación con quienes hicieron parte del anterior proceso recae la existencia de cosa juzgada, siendo claro que ninguna de las partes interpuso recurso de casación, quedando así lo definido inmutable, impidiendo que se vuelva a someter a discusión tal aspecto.

Ahora bien, el Tribunal Superior en su sentencia afirmó que el demandante prestó sus servicios para el señor **ELIUD BEDOYA MARIN** y entre el **30 de septiembre de 1999 al 01 de febrero de 2003**, conclusión que en manera alguna tiene efectos de cosa juzgada porque éste no fue vinculado a aquel proceso; pero justamente es en este nuevo proceso en el que sí integra la litis por pasiva, que se analiza la situación referida a la prestación del servicio del señor **JOSÉ HERIBERTO BEDOYA** en la Finca Cantabria para este empleador con el fin de determinar si efectivamente la prestación del servicio se efectuó en ese lapso para de ese modo analizar el derecho a la prestación deprecada.

6.3. LA SUSTITUCIÓN PATRONAL CON ELIUD BEDOYA MARIN

La figura de la sustitución patronal fue regulada en los artículos 67 a 70 del Código Sustantivo del Trabajo, definiéndose así:

ARTICULO 67. DEFINICIÓN. Se entiende por sustitución de {empleadores} todo cambio de un {empleador} por otro, por cualquier causa, siempre que subsista la identidad del establecimiento, es decir, en cuanto éste no sufra variaciones esenciales en el giro de sus actividades o negocios.

Se verifica entonces que la sucesión de empresarios precisa de: **i)** un cambio en la titularidad de la organización productiva por cualquier causa, como compraventa, arrendamiento o traspaso del negocio a cualquier título, u operaciones de reorganización empresarial, como las fusiones, adquisiciones, absorciones, liquidación con traspaso de bienes, etc., en virtud de las cuales un empresario subroga a otro en su posición empleadora y **ii)** la identidad de establecimiento o subsistencia de la empresa, entendida como un conjunto de medios organizados (personales, patrimoniales, técnicos) para llevar a cabo una actividad económica (**SL1399-2022**). Además, la jurisprudencia de la Sala Laboral ha interpretado que para que opere la sustitución de empleadores también se requiere **iii)** *“la continuidad en la prestación del servicio”* (**SL4530-2020**).

Y es claro que la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado en reiteradas ocasiones sobre su finalidad, señalando desde antaño que

para que ésta opere es necesario que no se presente una solución de continuidad en la prestación del servicio:

“Respecto a la institución jurídica en estudio, esta Sala se ha pronunciado en reiteradas oportunidades en el sentido de señalar los elementos fundamentales que la integran; así en la sentencia del 27 de mayo de 1999, radicación 11445, indicó como sus requisitos los siguientes: **“la presencia de un nuevo empleador en reemplazo del primero, la continuidad de la empresa, y la continuidad en la ejecución de los contratos de trabajo”**.

Esa apreciación jurídica de la Corte y que el Tribunal acogió, como quedó expuesto, tiene fundamento, en los artículos 67, 68 y 69 del Código Sustantivo del Trabajo, los cuales buscan proteger al trabajador en los eventos de sustitución de empleadores, por lo que, si no se presenta una solución de continuidad en la prestación del servicio, es perfectamente válido aceptar la presencia de la institución que se estudia, con todas las consecuencias que de ello se derivan.¹⁸

Ahora bien, la Alta Corporación de tiempo atrás ha precisado que en ciertos casos deben analizarse detenidamente las circunstancias en las que terminó el contrato de trabajo con el antiguo empleador y comenzó el nuevo, pues podría concluirse que la celebración de nuevos contratos de trabajo es apenas **aparente** y en virtud del **principio de primacía de realidad sobre las formas** concluirse que en la realidad se está ante el mismo contrato de trabajo. Lo anterior, ante posibles maniobras fraudulentas por parte de los empleadores, o ante la presencia de **pruebas que acrediten la continuidad y desvirtúen la aparente existencia de vínculos independientes**. Así, en la sentencia del **4 de agosto de 2009**, se consideró:

Pretendió efectivamente el legislador que los preexistentes contratos de los trabajadores no se vieran afectados por el cambio de empleador, sino por el contrario, protegerlos, estimando su unidad y permanencia, excepto que se justifique la terminación de uno y el inicio de otro, por disímiles motivos, como sería el caso de que el nuevo empleador quiera establecer unas específicas condiciones de trabajo. Pero, cuando las condiciones son las mismas, y la terminación del nexo contractual es apenas aparente, no podrá considerarse evidenciado un nuevo vínculo, distinto del antecedente, ni negarse la existencia de la sustitución patronal, y sus efectos, en tanto resulta palmaria una realidad contraria. Incluso, debe decidirse si la aparente terminación del contrato constituye un fraude a la ley, una distorsión para evadir los efectos de la sustitución, que lleve a reguardar el derecho del trabajador de no ver afectado su contrato, su antigüedad, y a otorgarle todas las garantías legales.

En tales condiciones no puede estimarse de manera rigurosa que la sustitución patronal se frustre siempre que aparezca un nuevo contrato de trabajo con el empleador sustituto, sino que deben analizarse las circunstancias en las que culminó el vínculo con el empleador sustituido y las condiciones de ejecución del nuevo.

En tales condiciones **no puede estimarse de manera rigurosa que la sustitución patronal se frustre siempre que aparezca un nuevo contrato de trabajo con el empleador sustituto, sino que deben analizarse las circunstancias en las que culminó el vínculo con el empleador sustituido y las condiciones de ejecución del nuevo.**

Y posteriormente, en sentencia **SL1943-2016** la Corte razonó¹⁹:

De acuerdo con lo que enseña la jurisprudencia reiterada de esta Corporación, se puede decir que, en principio, el raciocinio jurídico del *ad quem* encuadra en el precedente,

¹⁸ Sentencia del 4 de agosto de 2009, Rad. 31808. MP ELSY DEL PILAR CUELLO CALDERÓN.

¹⁹ M.P. JORGE MAURICIO BURGOS RUIZ.

puesto que, según este, para que opere la sustitución patronal, ciertamente se requiere, además de otros elementos que no son materia de controversia en el *sublite*, la continuidad en la prestación del servicio bajo el mismo contrato original, como lo asentó el Tribunal; sin embargo, son las circunstancias de cada caso en particular las que determinan si se dan los supuestos legales para la aplicación de la sustitución patronal o si, por el contrario, se encuentra excluida dicha figura.

Puede suceder que se dé formalmente la celebración de dos contratos de trabajo, pero que la realidad sobre la continuidad de la misma prestación del servicio se imponga (como es el caso del *sublite*), donde el contrato de trabajo original finaliza por decisión unilateral sin justa causa del empleador, pero de inmediato es contratado por el futuro propietario del propio establecimiento, y de esta manera, una vez se perfecciona la venta, se conjugan las calidades de propietario sustituto, con la de empleador sustituto a consecuencia de la forma como se da la reinstalación del trabajador.

Ahora, frente a las responsabilidades entre el antiguo y el nuevo empleador, la situación se encuentra regulada en los artículos 69 y 70 del CST en los que se dispone que el antiguo y el nuevo empleador son responsables solidariamente por las obligaciones que sean exigibles al momento de la sustitución, y aquellas que surjan con posterioridad a esa fecha, solo corresponden al nuevo empleador.

Pues bien, en la demanda se plantea que entre los demandados existió una sustitución patronal y que el actor prestó servicios en la Finca Cantabria mediante contrato de trabajo por lo menos **durante 20 años**, afirmación que se sustenta a partir del reconocimiento de los extremos laborales de la relación laboral que inició con el fallecido CASTOR IVÁN CORREA prolongada con sus herederos, sumado al tiempo de servicio en el mismo predio teniendo como empleador al señor **ELIUD BEDOYA MARIN**.

Para efectuar el estudio de la sustitución patronal que en este proceso se alega, se parte entonces de las siguientes premisas incuestionables:

- En primer lugar, se concluyó en el proceso anterior la existencia de sustitución patronal entre el señor CASTOR IVÁN CORREA y los señores ELVIA BUSTAMANTE VIUDA DE CORREA, CASTOR ALBERTO, MARGARITA, MIGUEL ÁNGEL, JOSÉ ROBERTO y LUIS FERNANDO CORREA BUSTAMANTE, HEREDEROS DETERMINADOS DEL CAUSANTE CASTOR IVÁN CORREA por una relación laboral desde el **31 de diciembre de 1980 al 29 de septiembre de 1999**, es decir, por un periodo de dieciocho (18) años, ocho (8) meses y veintiocho (28) días.
- También se concluyó en aquella providencia que la señora ELVIA BUSTAMANTE VIUDA DE CORREA fue la empleadora del actor en el lapso **02 de febrero de 2003 al 05 de junio de 2005**.
- Y como ya se ha anunciado, si bien el Tribunal Superior en su sentencia afirmó que el demandante prestó sus servicios para el señor **ELIUD BEDOYA MARIN** entre el **30 de septiembre de 1999 al 01 de febrero de 2003**, es en este nuevo proceso en el que éste

sí integra la litis por pasiva, que resulta procedente analizar la situación referida a la prestación del servicio del señor **JOSÉ HERIBERTO BEDOYA** en la Finca Cantabria para este empleador.

Sobre el particular, debe señalarse que, en efecto, el señor **BEDOYA MARIN** en la contestación de la demanda **aceptó** la calidad de empleador del señor JOSÉ HERIBERTO BEDOYA GARZÓN desde **septiembre de 1999 hasta febrero de 2003**, de manera que el asunto referido al extremo temporal del vínculo laboral con este empleador se encuentra claramente acreditado

En la contestación si bien se confiesa la existencia de la relación laboral se afirma que no resulta procedente declarar la existencia de sustitución patronal, afirmando que cuando el señor **BEDOYA MARIN** inició su posesión del predio Finca Cantabria este se encontraba abandonado a causa de un operativo de la fiscalía, señalando que no había trabajadores de ninguna índole.

Pues bien, la Sala no comparte el planteamiento que se expone por este codemandado, conforme pasa analizarse:

En primer lugar, se acredita el cambio en la titularidad de la organización productiva por cualquier causa, en virtud de las cuales un empleador subroga a otro la posición empleadora. Analizando con detenimiento la prueba practicada en el proceso anterior, se verifica que en aquel declaró como testigo el señor **ELIUD BEDOYA MARIN**, oportunidad en la que afirmó lo siguiente²⁰:

“Yo fui poseedor de la finca Cantabria, entre las épocas de septiembre de 1999, y finales de 2004 y principios de 2005, y en la actualidad poseo un pedacito de la finca Cantabria. Antes de 1999 no se (sic) quien (sic) era el propietario, pero se (sic) que la manejaba un señor Miguel Correa. En la actualidad la propietaria de la finca Cantabria es la señora Elvia Bustamante. No se (sic) si el demandante antes del año 1999 laboraba en la finca Cantabria.

(...)

¿desde que inicia su posesión en la finca Cantabria, explique, porque razón entra usted como poseedor de la finca la Cantabria? La finca fue incautada por la fiscalía y yo conociendo esto que la finca quedaba a merced de nadie y por mi amistad con Castor Alberto Correa Bustamante me fui para esa finca y empecé a poseerla toda vez que según les dijeron a ellos iban a perder la finca en el consejo nacional de estupefacientes. Yo cogí la finca hasta que el consejo nacional de estupefacientes quedara con ella, hecho que nunca sucedió, pues al cabo de 6-7 años la fiscalía devolvió la finca a sus legítimos dueños, yo devolví la finca y por las mejoras que había hecho y conservación, negocié (sic) y estoy usufructuando un mi (sic) pedazo, aunque tampoco tengo escrituras todavía.

²⁰ CARPETA SEGUNDA INSTANCIA - ARCHIVO 18 – PDFC012005-1239 – PAGINAS 249 a 255

Por otro lado, en la contestación a la demanda del anterior proceso la señora **ELVIA BUSTAMANTE VDA. DE CORREA**²¹ indicó que se hizo propietaria de la Finca CANTABRIA en el **año de 1998** hasta **septiembre de 1999** en el que se le entregó el predio al señor **ELIUD BEDOYA MARIN** para su usufructo quien la recibió sin trabajadores. Narra que él contrató unas personas para que le trabajaran bajo sus órdenes y bajo su responsabilidad y que, por incumplimiento y cambio de las situaciones, el señor **BEDOYA MARIN** entregó la finca en el mes de **febrero de 2003**. Así, afirma que desde esta fecha **hasta el día 05 de junio de 2005** el demandante **JOSÉ HERIBERTO BEDOYA** prestó sus servicios en la finca y fue liquidado mediante consignación en el Banco Agrario toda vez que no quiso recibir el dinero.

Por su parte **MARGARITA CORREA BUSTAMANTE** manifestó que el señor **ELIUD BEDOYA MARIN** fue quien arrendó o usufructuó la finca desde **septiembre de 1999** hasta **enero de 2003**, tiempo en el cual pagó un canon de arrendamiento del que ella no tuvo conocimiento respecto del valor. Dice que fue el señor **BEDOYA MARIN** quien contrató los trabajadores, les pagó y se entendió con todo lo de la finca durante ese tiempo, pues fue el patrón de los trabajadores y único usufructuario de la misma²².

Pues bien, analizando este acervo probatorio, se advierte por esta corporación que si bien en el marco del actual proceso el señor **ELIUD BEDOYA MARIN** argumenta que llegó al predio en virtud de una posesión irregular, lo cierto es que su dicho no encuentra respaldo probatorio alguno, quedando demostrado que lo que se presentó fue un contrato de naturaleza civil con los anteriores propietarios de la finca, en virtud del cual continuó con la administración del predio, de manera que en este proceso se ha demostrado que efectivamente se presentó un cambio de titularidad por *cualquier causa* cumpliéndose con el primer requisito.

El segundo requisito consiste en **la identidad de establecimiento o subsistencia de la empresa, entendida como un conjunto de medios organizados (personales, patrimoniales, técnicos) para llevar a cabo una actividad económica.**

El señor **BEDOYA MARIN** informa que el señor **JOSÉ HERIBERTO BEDOYA** se dedicaba a todo lo relacionado con el café y coincide con lo indicado por las señoras Margarita María y María Elvia en el interrogatorio de parte, quiénes señalaron que la actividad económica de la Finca CANTABRIA era la producción de café²³. Se acredita entonces que la identidad de la empresa continuó, cumpliéndose a cabalidad con el segundo

²¹ CARPETA SEGUNDA INSTANCIA - ARCHIVO 18 – PDFC012005-1239 – PAGINAS 131 a 137

²² CARPETA SEGUNDA INSTANCIA - ARCHIVO 18 – PDFC012005-1239 – PAGINAS 79 a 85

²³ CARPETA SEGUNDA INSTANCIA - ARCHIVO 18 – PDFC012005-1239 – PAGINAS 239 a 241, 243 a 244 y 249 a 255.

presupuesto exigido en nuestro ordenamiento jurídico para afirmar la existencia de una sustitución patronal.

La tercera exigencia, radica en la acreditación de la **continuidad en la prestación del servicio**. En relación con este aspecto, se observa que el señor **MIGUEL ÁNGEL CORREA BUSTAMANTE** al dar respuesta al HECHO SEGUNDO de la demanda indicó²⁴:

“NO ES CIERTO: Toda vez que mi representado no es ni ha sido propietario de la finca CANTABRIA, ha realizado contratos con el demandante, además por motivos de fuerza mayor en el mes de septiembre de 1999 se ausentó de la finca por más de tres años, hasta que en el mes de abril de 2003, se puso al frente de la citada finca, donde estaba contrato (sic) el demandante, es de anotar que cuando mi poderdante se ausento (sic) de la referida finca se quedó sin trabajadores. Según información que le suministraron a el (sic), la finca fue entregada al señor ELIUD BEDOYA MARIN no sabe si en venta o en arriendo por un termino (sic) de mas (sic) de tres años y fue el señor BEDOYA MARIN quien contrato (sic) al demandante (...)”

Por su parte **MARGARITA CORREA BUSTAMANTE**²⁵ al contestar el mismo hecho, expresó:

AL SEGUNDO : NO ES CIERTO : Toda vez que mi representada no ha utilizado los servicios de ninguna persona en la citada finca, pues solamente ha ido a la misma de paseo, nada mas y cuando ha ido mi representada nada ha tenido que ver con el demandante o con los demás trabajadores de la finca. No es cierto además debido a que después de salir de la cárcel el demandante, en el mes de octubre del año de 1999, el referido señor estuvo a ordenes del señor ELIUD BEDOYA MARIN, quien arrendó o usufructuó la finca desde septiembre de 1999 hasta enero de 2003, tiempo en el cual dicho señor pago un arriendo del que mi representada no tuvo conocimiento respecto del valor, y fue el señor BEDOYA MARIN quien contrato los trabajadores, les pago y se entendió con todo lo de la finca durante ese tiempo, pues fue él patrón de los trabajadores y único usufructuario de la misma.

Y la codemandada **ELVIA BUSTAMANTE VDA. DE CORREA** en la contestación dijo²⁶:

AL SEGUNDO : NO ES CIERTO : Toda vez que mi representada se hizo propietaria de la finca CANTABRIA en el año de 1998 hasta septiembre de 1999 cuando se le entrego la finca al señor ELIUD BEDOYA MARIN, para su usufructo, quien la recibió sin trabajadores, él cual contrato unas personas para que le trabajaran bajo sus ordenes y bajo su responsabilidad, dicho señor BEDOYA MARIN por incumplimiento y cambio de las situaciones entrego la finca el mes de febrero de 2003. Y desde esta fecha hasta el día 05 de junio de 2005 el demandante presto sus servicios en la finca y fue liquidado mediante consignación en el Banco Agrario toda vez que el demandante no quiso recibir el dinero.

Nótese entonces, que con ocasión de la captura del señor **MIGUEL ÁNGEL CORREA BUSTAMANTE** en el mes de **septiembre de 1999** el señor **ELIUD BEDOYA MARIN** se hizo cargo de la explotación económica de la finca, y ha quedado visto que confesó al contestar el **HECHO PRIMERO** de la demanda lo siguiente: “(...) *la relación laboral que nos costa (sic) es desde **septiembre de 1999 hasta febrero de 2003** (...)*”

²⁴ CARPETA SEGUNDA INSTANCIA - ARCHIVO 18 – PDFC012005-1239 – PAGINAS 141 a 147.

²⁵ CARPETA SEGUNDA INSTANCIA - ARCHIVO 18 – PDFC012005-1239 – PAGINAS 79 a 85

²⁶ CARPETA SEGUNDA INSTANCIA - ARCHIVO 18 – PDFC012005-1239 – PAGINAS 131 a 137

Se resalta por esta corporación que el señor **JOSÉ HERIBERTO BEDOYA** en el interrogatorio de parte de este proceso explica que en razón del problema legal que se presentó con el personal de la finca en el año **1999**, él también estuvo detenido **17 días**, lo que lleva a esta corporación a inferir, a partir del análisis del acervo probatorio en su conjunto, que fue éste el único lapso en el que no se acredita la prestación del servicio en la Finca CANTABRIA, sin que tal circunstancia conlleve a afirmar la ruptura en la **continuidad material de la prestación del servicio en la misma organización productiva**, regla que se armoniza con la explicado en la sentencia **CSJ SL981-2019**, en la que se indicó:

En torno al desarrollo lineal y la unidad del contrato de trabajo, resulta pertinente recordar que cuando entre la celebración de uno y otro contrato median interrupciones breves, como podrían ser aquellas inferiores a un mes, estas deben ser consideradas como aparentes o meramente formales, sobre todo cuando en el expediente se advierte la intención real de las partes de dar continuidad al vínculo laboral, como aquí acontece. Así lo ha sostenido la Corte, entre otras, en sentencia CSJ SL4816-2015:

(...) esta Sala de la Corte ha expresado que las interrupciones que no sean amplias, relevantes y de gran envergadura, no desvirtúan la unidad contractual, ella ha sido bajo otros supuestos, en los que se ha estimado que las interrupciones por 1, 2 o 3 días, e incluso la mayor de apenas 6 días, no conducen a inferir una solución de continuidad del contrato de trabajo real (...) (CSJ SL. 15 feb, 2011, rad. 40273).

Así, esta Sala de Decisión llega al convencimiento que en este proceso se acredita la configuración de la sustitución patronal alegada en la demanda con el señor **ELIUD BEDOYA MARIN** al acreditarse con suficiencia el cumplimiento de los requisitos de cambio de titularidad de la organización productiva, identidad de la empresa y continuidad en la prestación del servicio entre el **30 de septiembre de 1999** y el **01 de febrero de 2003**, así:

- Conforme lo definido en proceso anterior, desde el **31 de diciembre de 1980** al **29 de septiembre de 1999**, en razón de la existencia de sustitución patronal entre el señor CASTOR IVÁN CORREA y los señores ELVIA BUSTAMANTE VIUDA DE CORREA, CASTOR ALBERTO, MARGARITA, MIGUEL ÁNGEL, JOSÉ ROBERTO y LUIS FERNANDO CORREA BUSTAMANTE, HEREDEROS DETERMINADOS DEL CAUSANTE CASTOR IVÁN CORREA
- En este proceso se acredita prestación de servicio entre el **30 de septiembre de 1999** al **01 de febrero de 2003** acreditándose una sustitución patronal con el señor **ELIUD BEDOYA MARIN** en ese lapso
- También se concluyó en el proceso anterior la continuidad en la prestación del servicio en el lapso **02 de febrero de 2003** al **05 de junio de 2005**, aspecto que surge diáfano de la confesión efectuada por la codemandada ELVIA BUSTAMANTE VIUDA DE CORREA al afirmar²⁷:

²⁷ CARPETA SEGUNDA INSTANCIA - ARCHIVO 18 – PDFC012005-1239 – PAGINAS 131 a 137

“dicho señor BEDOYA MARIN por incumplimiento y cambio de situaciones entrego (sic) la finca el (sic) mes de febrero de 2003. Y **desde esta fecha hasta el día 05 de junio de 2005 el demandante presto (sic) sus servicios en la finca y fue liquidado mediante consignación en el Banco Agrario toda vez que el demandante no quiso recibir el dinero**”

- Y al declararse la existencia de la relación de trabajo con el señor **ELIUD BEDOYA MARIN**, se impone también declarar la **sustitución patronal** que a continuación se presenta con la señora ELVIA BUSTAMANTE VUIDA DE CORREA, con quien finalmente culmina el vínculo laboral el **5 de junio de 2005**.

Siendo, así las cosas, se comprueba con suficiencia que el señor **JOSÉ HERIBERTO BEDOYA** prestó servicios de manera continua e ininterrumpida en la misma unidad de explotación económica Finca CANTABRIA desde el **31 de diciembre de 1980** hasta el **05 de junio de 2005** por un período de **25 años y 2 días**.

7. SE ACREDITAN LOS REQUISITOS PARA LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN

Para efectuar el análisis conviene partir de una premisa clara, y es que la asunción de los riesgos de IVM por parte del Instituto Colombiano de Seguros Sociales fue progresiva y gradual. Con tal objetivo, **los artículos 59, 60 y 61** del Acuerdo 224 de 1966, aprobado por el Decreto 3041 del mismo año, clasificaron a los trabajadores en tres grupos, en función del tiempo de servicios que tuviesen al momento de su inscripción, así:

- Aquellos que **llevaban más de 20 años de servicio** a la empresa para cuando inició la cobertura del ISS en los riesgos de IVM, que no estaban obligados a inscribirse en el nuevo régimen de aseguramiento y tenían derecho a la pensión de jubilación del artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo, en condiciones normales, a cargo íntegramente del empleador.
- Quienes tenían **más de 10 y menos de 20 años de servicio a la empresa**, que quedaban sometidos a un régimen especial de *subrogación parcial*, en virtud del cual el empleador debía reconocer la pensión de jubilación prevista en el Código Sustantivo del Trabajo, tan pronto se cumplieran los requisitos establecidos para ello, pero debía seguir cotizando al sistema hasta que el trabajador adquiriera una pensión de vejez del ISS, «*siendo de cuenta del patrono únicamente el mayor valor, si lo hubiere, entre la pensión otorgada por el instituto y la que le venía siendo pagada por el patrono*» (CSJ SL, 7 feb. 1996, rad. 7641 y CSJ SL, 6 feb. 2002, rad. 16806, entre otras).
- Y **los que tenían menos de 10 años al servicio de la empresa para el momento del inicio de la cobertura**, respecto de quienes operaba una *subrogación total* del riesgo hacia el Instituto de Seguros Sociales, de manera que el empleador quedaba totalmente liberado del pago de la pensión de jubilación establecida en el Código Sustantivo del Trabajo.

Pero en este caso concreto **no se acredita en manera alguna por la pasiva, que el actor hubiese sido afiliado al ICSS con el fin de subrogar tal obligación**, situación por la que la norma a aplicar para analizar el derecho pensional del demandante es el **artículo 260** del CST, en el que se dispone lo siguiente:

"1. Todo trabajador que preste servicios a una misma empresa de capital de ochocientos mil pesos (\$ 800.000) o superior, que llegue o haya llegado a los cincuenta y cinco (55) años de edad, si es varón, o a los cincuenta (50) años si es mujer, después de veinte (20) años de servicios continuos o discontinuos, anteriores o posteriores a la vigencia de este Código, tiene derecho a una pensión mensual vitalicia de jubilación o pensión de vejez, equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del promedio de los salarios devengados en el último año de servicio.

2. El trabajador que se retire o sea retirado del servicio sin haber cumplido la edad expresada tiene derecho a la pensión al llegar a dicha edad, siempre que haya cumplido el requisito de los veinte (20) años de servicio".

La Corte Suprema de Justicia en la Sala Laboral (permanente y de descongestión)²⁸ ha interpretado que el **artículo 260 del C.S.T.** estableció dos requisitos para disfrutar de la pensión legal de jubilación. El *primero* relacionado con la adquisición del derecho, para lo cual basta con cumplir los 20 años de servicio previstos en esa norma. El *segundo*, relacionado con la exigibilidad de la prestación, lo cual depende de que se cumpla la edad.

Ahora bien, es claro que el Acto Legislativo de 2005 modificó, *en general*, todo el sistema pensional en Colombia. La enmienda constitucional pretendió superar la proliferación y dispersión de requisitos y beneficios establecidos en diferentes regímenes pensionales que, en últimas, comprometían la sostenibilidad financiera del sistema y creaba situaciones de inequidad²⁹. Pero se ha definido con suficiencia por la Jurisprudencia Nacional que el **Acto Legislativo 1 de 2005** resguardó los derechos adquiridos con justo título y algunas expectativas concebidas específicamente en el marco de la misma norma, a partir de disposiciones de transición o plazos especiales para la adquisición de las respectivas prestaciones³⁰ (**SL1870-2020**) .

Así, se concluye que en la norma constitucional se fijaron las siguientes premisas: i) las reglas pensionales diferentes a las previstas en el sistema general de pensiones (Ley 100 de 1993) expiraron el **31 de julio de 2010**; ii) el párrafo transitorio del artículo 68 de la

²⁸ Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencias SL1870-2020 del 10 de junio de 2020, rad. 73798; SL1000-2018 del 21 de marzo de 2018, rad. 46.947; SL5011-2016 del 20 de abril de 2016, rad. 46.743; SL550-2013 del 14 de agosto de 2013, rad. 59.379; 28 de octubre de 2008, rad. 33308; 28 de octubre 2008, rad. 29802; y 15 de septiembre de 2009, rad. 33177.

²⁹ Sentencia del 9 de agosto de 2017 (rad. 49768), de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

³⁰ Sentencia SL1870-2020 (rad. 73798).

Constitución protege los derechos y expectativas de las personas que cumplan los requisitos para acceder a tales pensiones entre el **29 de julio de 2005 y el 31 de julio de 2010**; y iii) no constituye una expectativa legítima, amparada por la Constitución, la del trabajador que adquirió su derecho con posterioridad al **31 de julio de 2010**.

Pues bien, de acuerdo con el análisis efectuado a lo largo de esta providencia, el señor BEDOYA GARZÓN prestó servicios a favor de los demandados por más de 20 de años de servicios continuos, en el lapso **31 de diciembre de 1980 hasta el 05 de junio de 2005** y cumplió **55 años de edad** el **6 de julio de 1998**³¹.

Como los **20 años de servicios** se cumplieron el **31 de diciembre del año 2000** data para la que ya había arribado a los **55 años de edad**, se advierte que la causación del derecho a la pensión de jubilación se presenta en el momento en que prestaba el servicio al señor **ELIUD BEDOYA MARÍN** y en todo caso, con anterioridad a la entrada en vigencia del **AL 1 de 2005**.

Ahora bien, el demandante reclamó el reconocimiento de la prestación con la presentación de esta demanda radicada el **25 de abril de 2012**³² y al haberse propuesto la excepción de prescripción que opera bajo los mandatos del **artículo 151** del Código Procesal del Trabajo, se condenará a un retroactivo pensional a partir del **25 de abril de 2009**. Y se verifica que, para esta fecha, ya había operado la sustitución patronal entre **ELIUD BEDOYA MARÍN** y **ELVIA BUSTAMANTE DE CORREA** lo que acaeció desde el **1 de febrero de 2003**; por lo que en los términos del **numeral 3** del **artículo 69** del CST las mesadas pensionales **deben ser cubiertas esta última**, sin perjuicio del derecho de repetición contra los antiguos empleadores:

3- En los casos de jubilación, cuyo derecho haya nacido con anterioridad a la sustitución, las pensiones mensuales que sean exigibles con posterioridad a esa sustitución deben ser cubiertas por el nuevo {empleador}, pero éste puede repetir contra el antiguo.

Con relación al monto de la prestación, éste se concederá con una suma equivalente al **salario mínimo mensual legal vigente**, valor acreditado en el proceso como aquel que recibía el actor como contraprestación de sus servicios:

El actor afirmó en el HECHO PRIMERO del proceso anterior que el último salario devengado para el **año 2004** correspondía a **\$84.000 semanales**. En aquel proceso, MIGUEL ÁNGEL CORREA BUSTAMANTE y ELVIA BUSTAMANTE VDA. DE CORREA indicaron

³¹ CARPETA PRIMERA INSTANCIA – ARCHIVO 01 – PAGINA 9

³² CARPETA PRIMERA INSTANCIA – ARCHIVO 01 – PAGINA 8

que el salario devengado era el afirmado en la demanda que correspondía a una suma igual al salario mínimo³³. Y en los mismos términos declaró **ELIUD BEDOYA MARÍN** al dar su testimonio en el proceso anterior, sobre una remuneración al actor correspondía a la que se viene afirmando³⁴.

Siendo, así las cosas, se condenará al pago de **CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS (\$ 153.968.492)** por concepto de retroactivo pensional desde **25 de abril de 2009** hasta el **29 de febrero de 2024**, con 14 mesadas porque el derecho se causó antes de entrada en vigencia del acto legislativo 001 de 2005.

RETROACTIVO PENSIONAL				
Año	IPC	# mesadas	Valor pensión (mínimo)	Total Retroactivo (mínimo)
2009	2,00%	10,2	\$ 496.900	\$5.068.380
2010	3,17%	14	\$ 515.000	\$7.210.000
2011	3,73%	14	\$ 535.600	\$7.498.400
2012	2,44%	14	\$ 566.700	\$7.933.800
2013	1,94%	14	\$ 589.500	\$8.253.000
2014	3,66%	14	\$ 616.000	\$8.624.000
2015	6,77%	14	\$ 644.350	\$9.020.900
2016	5,75%	14	\$ 689.454	\$9.652.356
2017	4,09%	14	\$ 737.717	\$10.328.038
2018	3,18%	14	\$ 781.242	\$10.937.388
2019	3,80%	14	\$ 828.116	\$11.593.624
2020	1,61%	14	\$ 877.803	\$12.289.242
2021	5,62%	14	\$ 908.526	\$12.719.364
2022	13,12%	14	\$ 1.000.000	\$14.000.000
2023	9,28%	14	\$ 1.160.000	\$16.240.000
2024		2	\$1.300.000	\$2.600.000
TOTAL				\$153.968.492

La señora **MARÍA ELVIA BUSTAMANTE DE CORREA** continuará reconociendo una mesada pensional a partir del **01 de marzo de 2024** en cuantía de **UN MILLÓN TRESCIENTOS MIL PESOS (\$1.300.000)**, la que se incrementará anualmente en los términos del **artículo 14 de la Ley 100 de 1993**. **MARÍA ELVIA BUSTAMANTE DE CORREA** descontará del valor del retroactivo los aportes en salud que debe remitir a la EPS en la que el demandante tenga

³³ CARPETA SEGUNDA INSTANCIA - ARCHIVO 18 – PDFC012005-1239 – PAGINAS 131 y 141

³⁴ CARPETA SEGUNDA INSTANCIA - ARCHIVO 18 – PDFC012005-1239 – PAGINA 251

la cobertura como pensionado cotizante. El descuento que opera por mandato legal (**SL 1169 de 2019** y **SL1019-2020**)

8. LAS PRETENSIONES ACCESORIAS.

Sea lo primero señalar los intereses moratorios previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 se aplican a todo tipo de pensiones legales, reconocidas con posterioridad a la entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones, aspecto definido por la Sala de Casación Laboral en la sentencia **CSJ SL1681-2020**, providencia en la que se aclaró que el artículo 53 de la Constitución Política obliga al Estado y a las entidades de previsión social a garantizar “*el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las **pensiones legales***”, premisa que no distingue la fuente legal o el tipo de pensión. Igualmente, explicó que el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 tuvo el propósito de superar las viejas discusiones doctrinales y jurisprudenciales en torno a la manera de resarcir los perjuicios ocasionados por la mora en el pago de las pensiones. Por consiguiente, estamos frente a una regulación unificadora, aplicable a todo tipo de pensiones, sin importar su origen legal de manera que no es pertinente efectuar algún análisis sobre la conducta del deudor obligado, sino que proceden automáticamente por la mora en el pago efectivo de la obligación, sin que sea necesario realizar algún examen de la conducta de la entidad obligada tendiente a descubrir algún apego a los postulados de la buena fe.

Pero en este caso concreto no se acredita su procedencia, dado que entre el señor **JOSÉ HERIBERTO BEDOYA** y algunos de los sujetos que integran la pasiva ya se había tramitado proceso anterior con decisión absolutoria y **para la definición del derecho pensional** se requería definir la **sustitución patronal** con el señor **ELIUD BEDOYA MARÍN** lo que en efecto ocurre en esta providencia, conllevando con ello a que se concluyera una prestación de servicios superior a 20 años.

Así, se **CONDENARÁ** a la **INDEXACIÓN** del retroactivo pensional reconocido porque las mesadas reconocidas y no pagadas en su oportunidad legal se encuentran afectadas por la devaluación de la moneda derivada de una economía inflacionaria como la nuestra, siendo claro que esta condena no implica el incremento del valor del crédito ya que su función consiste únicamente en *evitar la pérdida del poder adquisitivo de la moneda y la consecuente reducción del patrimonio de quien accede a la administración de justicia*, causada por el transcurso del tiempo. Tampoco puede verse como una sanción, ya que lejos de castigar al deudor, lo que garantiza es que éste crédito no pierda su valor real. Así, se impone proferir una condena que ponga al demandante en la situación más cercana al supuesto en que se hallaría de no haberse producido el menoscabo tal como lo dispone el **artículo 16 de la Ley 446 de 1998** según el cual «dentro

de cualquier proceso que se surta ante la Administración de Justicia, la valoración de daños irrogados a las personas y a las cosas, atenderá los principios de reparación integral y equidad y observará los criterios técnicos actuariales». Y la forma en que aquello se garantiza en el marco de la protección especial de los derechos laborales y de la seguridad social es a través de la indexación como consecuencia de la incontenible depreciación de la moneda **(SL 359 -2021)**.

9. COSTAS

Al haberse revocado la sentencia en su integridad resultando vencidos en el señor **ELIUD BEDOYA MARÍN** y la señora **MARÍA ELVIA BUSTAMANTE DE CORREA**, se condenará en costas en la primera instancia en los términos del numeral 1 del artículo 365 del CGP. En esta instancia **no se causan** porque se conoció el proceso en el grado jurisdiccional de consulta.

10. LA DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sala Sexta del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, **DECIDE REVOCAR** la sentencia proferida por Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito de Medellín, para en su lugar:

PRIMERO: DECLARAR que, entre ELVIA BUSTAMANTE DE CORREA, CASTOR ALBERTO, MARGARITA, MIGUEL ÁNGEL, JOSÉ ROBERTO, LUIS FERNANDO CORREA BUSTAMANTE, HEREDEROS DETERMINADOS DEL CAUSANTE CASTOR IVÁN CORREA y ELIUD BEDOYA MARÍN operó una sustitución de empleadores respecto al señor JOSÉ HERIBERTO BEDOYA GARZÓN por una relación laboral causada entre el **31 de diciembre de 1980** al **2 de febrero de 2003**, de acuerdo con el análisis efectuado en la parte motiva de esta providencia, y conforme los siguientes tiempos de servicio:

- Del **31 de diciembre de 1980 al 29 de septiembre de 1999**, prestación del servicio con el señor CASTOR IVÁN CORREA fallecido y prolongada con ELVIA BUSTAMANTE DE CORREA, CASTOR ALBERTO, MARGARITA, MIGUEL ÁNGEL, JOSÉ ROBERTO, LUIS FERNANDO CORREA BUSTAMANTE
- Del **30 de septiembre de 1999 al 01 de febrero de 2003** con el señor ELIUD BEDOYA MARÍN
- Del **02 de febrero de 2003 al 05 de junio de 2005**, bajo el nexo laboral con la señora ELVIA BUSTAMANTE DE CORREA

SEGUNDO: DECLARAR que el señor **JOSÉ HERIBERTO BEDOYA GARZÓN** acredita el derecho al reconocimiento de una pensión de jubilación ante el cumplimiento de los requisitos consagrados en el artículo 260 del CST, causada el **31 de diciembre del año 2000**, fecha en la que acreditó 20 años de servicios y en la que ya había arribado a los **55 años de edad**, por un valor equivalente a **un (1) salario mínimo legal mensual vigente**.

En atención a la sustitución pensional declarada en el numeral anterior, las mesadas pensionales deben ser cubiertas por la señora **ELVIA BUSTAMANTE DE CORREA**, sin perjuicio del derecho de repetición contra los antiguos empleadores.

TERCERO: CONDENAR a la señora **ELVIA BUSTAMANTE DE CORREA** al pago de **CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS (\$ 153.968.492)** por concepto de retroactivo pensional por concepto de pensión de jubilación desde **25 de abril de 2009** hasta el **29 de febrero de 2024**, con 14 mesadas.

La señora **MARÍA ELVIA BUSTAMANTE DE CORREA** continuará reconociendo una mesada pensional a partir del **01 de marzo de 2024** en cuantía de **UN MILLÓN TRESCIENTOS MIL PESOS (\$1.300.000)**, que se incrementará anualmente en los términos del **artículo 14 de la Ley 100 de 1993**.

Se descontará del valor del retroactivo los aportes en salud para destinarlos a la EPS en que el trabajador se afilie o encuentre afiliado

CUARTO: CONDENAR a la señora **MARÍA ELVIA BUSTAMANTE DE CORREA** a pagar **la INDEXACIÓN** del retroactivo causado al momento del pago, de acuerdo con la siguiente fórmula y criterios:

$$\frac{\text{ÍNDICE FINAL} \times \text{VALOR A INDEXAR} - \text{VALOR A INDEXAR}}{\text{ÍNDICE INICIAL}} = \text{VALOR INDEXACIÓN}$$

Los valores con los que ha de remplazarse la fórmula deben ser:

ÍNDICE FINAL correspondiente al **IPC** para la **fecha en que haya de efectuarse el pago**

ÍNDICE INICIAL correspondiente al **IPC** para vigente **a la fecha en que debió efectuarse el pago de cada mesada**

VALOR A INDEXAR que se refiere al **monto de cada mensualidad**

QUINTO: Las excepciones propuestas quedaron resueltas en la sentencia, y solo está llamada a prosperar de manera parcial la de prescripción respecto de las mesadas causadas con anterioridad al **25 de abril de 2009**.

SEXTO: COSTAS en primera instancia a cargo del señor **ELIUD BEDOYA MARÍN** y la señora **MARÍA ELVIA BUSTAMANTE DE CORREA**. En esta instancia **no se causan** porque se conoció el proceso en el grado jurisdiccional de consulta.

Se firma en constancia por quienes en ella intervinieron.

Lo anterior se notifica por EDICTO.

Los Magistrados,



ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ



JUAN DAVID GUERRA TRESPALACIOS



MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA